

En busca de un modelo económico social

Por Guillermo MEDINA

ASI como hay una transición formal (redacción de una nueva Constitución) que no presenta problemas insuperables y una transición moral y cultural (democratización de la cultura y de la sociedad), la democratización del sistema económico forma igualmente parte del cambio globalmente considerado.

La transición española es un proceso más largo y complejo que el conjunto de hechos políticos formales que van desde el referéndum del 15 de diciembre a la aprobación de la próxima Constitución; la situación del país es constituyente en un sentido muy amplio. También asistimos a los primeros debates sobre la «constitución» de un nuevo modelo o sistema económico. El tema no es exclusivo de España, pero es particularmente actual entre nosotros, porque la redefinición de grandes opciones es inevitable, dada la coyuntura histórica que vive el país, y la grave crisis económica.

QUIZA no ha habido en la historia española otra encrucijada con tan alto consenso constitucional como el que actualmente se da entre los grupos políticos parlamentarios. En cambio, la construcción de un modelo económico-social aceptable para la mayoría del país se presenta más incierta. Mientras no ofrece duda que el modelo político-constitucional es el de una democracia pluralista, con garantía de derechos y libertades, forma de Estado monárquica (aceptada o no contestada abiertamente) y hasta integrada en la estructura institucional y las prácticas de la Europa comunitaria, aparecen desdibujados los principios que han de regir el funcionamiento de la economía, la función de los sindicatos, las posibilidades y límites de la libre iniciativa, etc. Cuando un ministro afirma que «hay que llevar al ámbito de la empresa el principio de convertir en ciudadanos a súbditos», la controversia que se desata deja ver dudas y sombras sobre la transición económico-social.

El problema debe preocuparnos, porque el consenso constitucional no puede funcionar sin un mínimo contenido económico-social, que o debe estar presente en la propia Constitución o ser aceptado por los grupos sociales independientemente de ésta. Ahora mismo podemos observar cómo la ausencia de pacto social es una amenaza para la continuidad y la permanencia del pacto político. La urgencia de trasladar a lo económico-social el consenso constitucional y político es manifiesta, y la negativa en este sentido de algunos sectores sindicales y políticos es una inquietante espada de Damocles sobre el conjunto del sistema que estamos creando.

Quizá ha llegado el momento de deshacer las dudas sobre los principios que deberán regir el ordenamiento económico-social español, y trasladar a este terreno el pacto de convivencia que ya se da en lo político y que tendrá su reflejo en la Constitución. Aceptemos que el nivel de coincidencia sobre los derechos y libertades es mucho más claro, permanente y definido que el que es posible esperar en cuanto al debate libertad-socialización. Pero la convivencia resultaría imposible si Gobierno y oposición de izquierda sostuvieran dos modelos económicos antagónicos, irreconciliables, y la estrategia de la segunda consistiera en dinamitar el sistema propuesto por el Gobierno, negar cualquier colaboración (que se vería como «apuntalamiento» de ese sistema) y buscar la sustitución completa lo antes posible.

LA IZQUIERDA Y EL MODELO ECONOMICO

El problema hoy en España es más de ambigüedad sobre las actitudes y objetivos del modelo económico de los parti-

dos que de confrontación abierta entre modelos definidos. ¿Cuál es la actitud del partido en el Gobierno y de la izquierda, particularmente del P.S.O.E.? En cuanto a éste, parece claro que su propuesta es alcanzar un socialismo autogestionario basado en la sustitución de la propiedad privada de bienes productivos y del capitalismo de Estado por la propiedad social; se trata de una propuesta utópica, sin que haya que dar a este concepto un significado peyorativo, sino de objetivo finalista propio de la filosofía política socialista.

A corto plazo, sin embargo, las propuestas económicas del P.S.O.E. parecen estar más cerca de las de la socialdemocracia que de una contestación global e inmediata del modelo neoliberal. El P.S.O.E. no orientó su campaña electoral según los objetivos revolucionarios que contiene el programa de su congreso, sino en un sentido de moderación que si es digno de aplauso, no por eso evitó la acusación de travestismo político. Lo que no está claro en el P.S.O.E. es la frontera entre sus propuestas de hoy o mañana y los objetivos a largo plazo; ni conocemos con precisión cuáles son esas propuestas inmediatas, porque como partido de oposición ha atacado al Gobierno, pero no ha ofrecido paralelamente una alternativa de programa económico clara y precisa. Es cierto que los dirigentes socialistas han repetido que el programa económico de U.C.D.-Gobierno es un plagio del P.S.O.E., pero entonces no se comprende bien porqué el partido de Felipe González se niega al Gobierno de coalición y plantea últimamente una oposición más propia del acoso y derribo que de cooperación en la búsqueda de soluciones.

En todo caso, hay hechos como para abrigar la sospecha de que el comportamiento del P.S.O.E. frente al Gobierno han sufrido últimamente un cambio táctico: no plantea una alternativa de poder a medio plazo, con vistas a las próximas elecciones generales, lo que le inclinaría a una oposición cooperadora a corto plazo, como parecía ser la tendencia tras las elecciones; plantea, por el contrario, una alternativa —el poder— a corto plazo, porque «esperamos que el equilibrio actual puedan romperlo o las elecciones sindicales o las municipales» (Felipe González el pasado sábado en Roma).

Esta última opción táctica lleva lógicamente al principal partido de oposición a una actitud de ataque y confrontación y le aleja de la cooperación con el Gobierno en la búsqueda de soluciones a la crisis. No quiero entrar a calificar si ese comportamiento antepone los intereses del partido a los generales del país en estos momentos críticos. Eso tendrán que juzgarlo los electores. Voy incluso a aceptar que al obrar así es coherente con la opinión de sus bases. Pero si el P.S.O.E. quiere ser una «alternativa de poder» inmediata, entonces debe definirse sobre las características concretas de la sociedad y del modelo económico que propone al país; debe ofrecer un programa económico concreto, al igual que el Partido Socialista francés. Si la izquierda gobierna mañana en Francia, todos saben lo que pueden esperar; pero entre nosotros lo de «alternativa de poder» no nos aclara las interrogantes sobre lo que haría Felipe González si ocupara La Moncloa.

ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO

Con independencia de cuál sea el planteamiento táctico del P.S.O.E. con respecto al problema de definir el modelo económico-social, es evidente que no hay por parte de este partido ni aceptación del modelo de economía social de mercado de sus correligionarios alemanes ni rechazo expreso del mismo como vía posible hacia formas de socialización más avanzada. Esta ambigüedad mantiene un punto de incertidumbre que no facilita la claridad que la crisis económica requiere de los partidos. Por lo cual me animo a proponer a los responsables del P.S.O.E., sin ánimo polémico alguno ni

otro deseo que el de la clarificación, su contribución al debate sobre cómo salir de la crisis y a qué modelo nos dirigimos.

No parece que la gran mayoría de la izquierda vea en la crítica situación económica actual la ocasión de construir un modelo de economía socialista sobre las cenizas del sistema de libre empresa. No es esa, desde luego, la actitud del P.C.E., convencido de que ayudar a salir de la crisis no significa «curar la crisis del capitalismo», sino consolidar la democracia a partir de la cual todos pueden trabajar por sus objetivos. La opción actual no se plantea entre inflación o socialismo, sino entre una fórmula de austeridad y reformas en el cuadro de una economía social de mercado o la alternativa autoritaria para salir de la crisis.

No parece que deba resultar excesivamente incómodo a la izquierda democrática apoyar ahora un modelo que si bien es asumido y administrado por la derecha liberal y el centro reformista, supone una modernización y reforma de las estructuras económicas. Identificar este modelo válido para una España democrática con la política de desarrollo del franquismo no sería honesto. Aquella mezcla de tecnocracia, liberalismo económico, intervencionismo, proteccionismo estatal, autoritarismo político y demagogia social-sindical propia del régimen anterior, poco tiene que ver con el nuevo modelo, más social y menos estatista, más libre y menos liberalista, más competitivo y menos proteccionista, más democrático y menos impune.

Sobre el Gobierno y la U.C.D. recae fundamentalmente la tarea de definir los principios y fronteras del modelo socio-económico. El 15 de junio no se votó un cambio de sistema en cuanto al principio de libertad económica. Pero se dejó ver el deseo de un cambio cualitativo, de reformas de correctivos sociales, de intervención activa a favor de una mayor igualdad. Todas esas aspiraciones mayoritarias en la sociedad española pueden y deben ser integradas en el nuevo modelo, que será, como es la tónica en la Europa desarrollada, de economía mixta, donde el principio social y la primacía de los intereses y los servicios sociales corrigen al libre juego de las fuerzas del mercado. A eso llamamos economía social de mercado.

Escribo economía social de mercado y no economía libre de mercado porque aquella es la que se va configurando en la Europa comunitaria por la cual hemos optado, mientras que la segunda se da —y no en estado de pureza liberal— en Estados Unidos. En uno como en otro modelo, sin embargo, la libertad de empresa es principio reconocido y no contestado, aunque el reparto del poder en la empresa sea motivo de largo debate. Y digo esto, porque hay una tendencia en España a describir en términos más propios del socialismo un modelo económico —el social de mercado— que es claramente diferenciable de cualquier posible unión socialista.

La definición del modelo, de las reglas del juego, resulta fundamental para enfrentar la crisis. Una política antiinflacionista sólo puede alcanzar éxito si es firme y crea convicción, si tiene continuidad y emplea todos los instrumentos de la política económica. Y si gana la batalla psicológica, si infunde confianza. Y ésta no se logra sin un cuadro de objetivos y un calendario, y, en el horizonte, un modelo claro, unas reglas del juego.

El Gobierno de la U.C.D. no recibió sus votos para enfrentar la crisis con soluciones socialistas. Tres millones y medio de pequeños y medios empresarios, de artesanos y agricultores independientes, que dan empleo al 85 por 100 de la fuerza laboral, sólo esperan garantías y definiciones claras para recobrar la confianza. El empresario no está contra las reformas, pero quiere sentirse libre de potenciales amenazas, desea seguridades sobre su propia supervivencia como empresario y claridad sobre los límites de la socialización.